

Jurisdicción: Penal

Procedimiento abreviado núm. 10/2000.

**Ponente:** Ilmo. Sr. D. Pedro Antonio Casas Cobo.

OBSTRUCCION A LA JUSTICIA Y DESLEALTAD PROFESIONAL: Juez o miembro del tribunal, representante del Ministerio Fiscal, secretario judicial o cualquier funcionario que revelare actuaciones declaradas secretas: inexistencia: sargento comandante de puesto de la Guardia Civil: no puede ser sujeto activo del delito; Particular que intervenga en el proceso que revelare actuaciones declaradas secretas: inexistencia: sargento comandante de puesto de la Guardia Civil: participación limitada a llevar a cabo ciertas indagaciones encargadas por compañeros de la Policía Judicial: ni intervino en el procedimiento ni tenía conocimiento de las actuaciones.

INFIDELIDAD EN LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS Y VIOLACION DE SECRETOS: Autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados: bien jurídico protegido; inexistencia: llamada telefónica de sargento comandante de puesto de la Guardia Civil en la que revela la noticia de que un comunicante anónimo imputa un homicidio al hermano de la receptora de la llamada, a quien había llamado para preguntarle sobre el entorno familiar de la persona a la que se le imputaba el homicidio: sospechoso que ya era conocido, no siendo novedoso lo denunciado, ni generándose ningún peligro para la investigación, que terminó con la condena del homicida: desconocimiento del contenido y finalidad exacta de las revelaciones debido a las retractaciones y falta de memoria de los testigos: principio de intervención mínima.

*La Sección 2ª de la Audiencia provincial de Tarragona **absuelve** a Claudio de los delitos de deslealtad profesional y violación de secretos de los que venía siendo acusado.*

En Tarragona, a diez de abril de dos mil tres.

Vista, en audiencia pública la causa penal seguida con el número 65/02, dimanante de los autos de Procedimiento Abreviado nº 10/00 del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Amposta, contra Claudio, natural de Villafames (Castellón), nacido el 16-4-1952, con DNI, núm. NUM 000, y cuyos demás datos y circunstancias obran en los autos, representado por la Procuradora Inmaculada Amela Rafales y defendido por el Letrado Joseph Canicio Querol; actuando como acusación particular, Guillermo, Sofía y Jorge, representados por el Procurador José María Solé Tomás y defendidos por el Letrado F. Zapater Esteban, con la intervención del Ministerio Fiscal, y siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Pedro Antonio Casas Cobo, aparecen los siguientes:

#### ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO** Con fecha 15 de noviembre de 2002 se recibieron los autos del Juzgado nº 2 de Amposta. Una vez turnada la ponencia, se declaró por Auto de 8 de enero de 2003 la pertinencia de la prueba propuesta por las partes. Convocadas las partes para la celebración del juicio oral, tuvo lugar el día 8 de abril de 2003.

**SEGUNDO** Practicada la prueba, el Ministerio Fiscal elevó a definitivas las conclusiones provisionales, solicitando la absolución del acusado. La acusación particular solicitó la condena del acusado como autor de un delito del art. 466.2 del Código Penal de 1995 (RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777), en relación con el art. 417, o alternativamente como autor de un delito de revelación de secreto o información del art. 417.1, párrafo primero, del CP a la pena de 16 meses multa, con una cuota diaria de 5.000 pesetas, e inhabilitación especial de dos años y un mes para el empleo de Guardia Civil, en el primer caso, o bien de 14 meses de multa, con una cuota diaria idéntica e inhabilitación especial de un año y once meses para dicho empleo. Por el Letrado de la Defensa se elevaron a definitivas las conclusiones provisionales, quedando los autos vistos para dictar Sentencia, tras concederse al acusado la oportunidad de decir la última palabra.

**TERCERO** En la tramitación de la presente causa, se han observado las prescripciones y formalidades señaladas por la Ley (LEG 1882\16).

#### HECHOS PROBADOS

El 10 de marzo de 1998, sobre las 23.50 horas, una persona no identificada llamó al Puesto de la Guardia Civil de Uldecona, desde donde se desvió automáticamente la llamada a la 431ª Comandancia de la Guardia Civil de Tarragona. Dicha persona se refería a los hechos objeto del Sumario núm. 3/82, seguido en el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Tortosa por los delitos de asesinato y violación de Carla. Dijo que uno de los autores fue «un tal Jose Pablo, que estuvo casado con la hija de un Guardia Civil de Uldecona ya retirado, en la actualidad separado de ella». Añade que «esta información la sabe a través de un familiar del tal Jose Pablo que falleció y era amigo suyo...». La llamada telefónica motivó nuevas diligencias de investigación llevadas a cabo por la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Tortosa, mediante investigación del entorno familiar de Jose Pablo, intervenciones telefónicas a familiares y detención de algunos de ellos. Terminándose por reabrir la causa penal, que se hallaba sobreseída. El auto de reapertura es de 29-4-1998, con declaración de secreto de sumario desde esa fecha hasta el día 25-6-1998.

En fecha indeterminada, entre últimos de abril y la primera quincena de mayo, Claudio, Sargento Comandante de Puesto de la Guardia Civil de Uldecona, mayor de edad y sin antecedentes penales, llamó por teléfono en varias ocasiones a Lorenza, hermana del citado José Pablo, a la que conocía como vecina de la localidad porque previamente ésta había presentado ciertas denuncias debidas a problemas conyugales y porque había trabajado dos o tres veces en la casa de aquél. El referido agente tenía encomendada la averiguación de datos familiares de Jose Pablo, por encargo del equipo de Policía Judicial. Con este fin efectuó tales llamadas telefónicas. En dichas conversaciones, Claudio, a consecuencia del conocimiento que tenía de la referida llamada anónima, por haber recibido esa información de la Unidad de Policía Judicial, la comunicó a Lorenza; pese a lo cual, la investigación siguió su curso, sin alteración alguna por esta causa, y José Pablo fue condenado por sentencia de 10 de febrero de 2000 de la Audiencia Provincial de Tarragona a 20 años de reclusión menor por un delito de homicidio y 10 años de prisión mayor por otro de violación en grado de tentativa.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO** Para fijar los hechos probados hay que partir de la declaraciones sumariales de los testigos, prestadas en la causa seguida por homicidio el día 16 de mayo de 1999. En particular, Lorenza manifestó en presencia judicial que el acusado la había llamado por teléfono, extremo que no discute el acusado ni los testigos, añadiendo: «y entonces es cuando le dijo lo de la llamada, que había llamado una tercera persona diciendo que uno de mis cuñados sabía mucho sobre lo del castillo». Antonia declaró en iguales condiciones: «así como una llamada efectuada por el Sr. Claudio, teniente de la Guardia Civil de Uldecona, donde le manifestaba que había habido una llamada diciendo que su hijo Jose Pablo había sido el autor de estos hechos, así como dos personas, y lo sabían tres personas. Que Claudio avisó a Antonia y ésta se lo comentó a la declarante y Antonia le manifestó podría provenir de su cuñado César, porque sospechando Lorenza de él, y si ellos no arreglaban la separación dicho César y su esposa, tendría recuerdos toda la familia», «que Lorenza supo de esta llamada por el que manda en la Guardia Civil de Uldecona que se llama Claudio», «que la relación de amistad de Antonia y Claudio le viene de que Antonia limpiaba en casa de la suegra de Claudio». Aunque estas declaraciones, prestadas en calidad de imputadas, no han sido ratificadas en esta causa, tienen valor probatorio por haber sido introducidas en el debate del juicio oral, considerando la concurrencia de otros indicios objetivos y de pruebas que las corroboran, como también la ausencia de explicación razonable de la patente contradicción con la versión dada por el testigo en el plenario. En este sentido, es destacable que Lorenza dijo no acordarse de la revelación del Sargento. Mientras que Antonia manifestó en el juicio que en su declaración sumarial solamente dijo que conocía al imputado. Si bien, aclara que siempre dijo la verdad. Tales explicaciones, lejos de desvirtuar su primera declaración, o bien es compatible con ella o bien la respalda, en el segundo caso, pues si algo es claro es el contenido de aquélla, acreditado tanto por la fe pública judicial, con presencia de letrado y todas las garantías, como por la testifical de los agentes de Policía Judicial, que recordaban en el juicio como el juez instructor les preguntó si el Sargento de Uldecona podía obstaculizar la investigación.

**SEGUNDO** La retractación contradice el resultado de las intervenciones telefónicas. En particular, en el f. 64 consta el relato de lo sucedido por Antonia, con referencia expresa a la llamada telefónica que desencadenó la investigación policial. La prueba testifical de José Pedro acredita que Lorenza le recriminó, refiriéndose a la revelación del acusado y a la amistad que tenía con ella. De otra parte, la referida llamada anónima no era conocida, pues se difundió por primera vez en la prensa el día 19 de mayo de 1998, según el testigo Juan Manuel, que por su profesión de periodista siguió atentamente el caso. Lógicamente, las declarantes no tenían otro modo de conocer la llamada anónima, considerando que en la fecha de su primera declaración las actuaciones se hallaban bajo el secreto de sumario y que el conocimiento de las diligencias era limitado, según declaró, por ejemplo, el agente Jesús Carlos, que participó en la investigación.

**TERCERO** El delito del art. 466 (RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) es especial, en el sentido de que solamente es punible la conducta cometida por determinadas personas, como abogados, procuradores, jueces, representantes del Ministerio Fiscal, secretarios judiciales, funcionarios de Justicia, o cualquier otro particular que intervenga en el proceso. El acusado no se encuentra en ninguno de tales supuestos, ni se puede decir que interviniera en el proceso, por cuanto no tenía conocimiento de las actuaciones judiciales y su participación se limitó a llevar a cabo ciertas indagaciones, que le fueron encargadas por sus compañeros de Policía Judicial. En cambio, el art. 417.1 del CP (RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) castiga a «la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados». Como declara la STS 1191/99, de 13-7 (RJ 1999\5698), el bien jurídico protegido es el buen funcionamiento de las Administraciones Públicas y, en definitiva, el bien común como prioritario objetivo a que va dirigido el desempeño de la actividad de los funcionarios que las integran, en tanto que la revelación de los secretos e informaciones no divulgables irroga un perjuicio de mayor o menor relevancia al servicio que la Administración presta a los ciudadanos. Añade la STS 584/98, de 14-5 (RJ 1998\4877), que la ley protege el deber de sigilo de los funcionarios,

incluyendo las informaciones que por su propia naturaleza son reservadas, sin necesidad de calificación formal de secretos. No obstante, debe matizarse, conforme a la primera de las sentencias citadas, que nos encontramos con un tipo penal abierto por imperativo de la realidad, toda vez que no resulta posible establecer casuísticamente en la norma los secretos e informaciones concretas cuya revelación integre la conducta típica. Por ello, debemos atender a la relevancia del hecho, porque cuando el quebrantamiento del deber de sigilo y discreción ocasione un perjuicio de menor entidad a la causa pública, la conducta permanecerá en el ámbito de la infracción administrativa, pero cuando el daño generado al servicio público -o a un tercero- adquiera una cierta relevancia, la conducta del funcionario desbordará el marco de la ilicitud administrativa para integrar un ilícito penal.

**CUARTO** Llevados estos principios al caso que nos ocupa, ha de prevalecer el principio de intervención mínima del Derecho penal, que reserva la pena a las conductas socialmente más reprochables. Ello, partiendo de que la revelación de información descrita en este caso, atribuida al acusado, no tuvo consecuencias perjudiciales para la investigación, que terminó con la condena del homicida. Sin que deba confundirse tal elemento con el grave daño que, como concepto jurídico indeterminado, fundamenta la agravación del subtipo del párrafo segundo del art. 417 CP (RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) y requiere una particular ponderación del menoscabo sufrido por los fines de la Administración. Efectivamente, la noticia de que un comunicante anónimo imputa el homicidio a quien ya era conocido sospechoso (según la declaración de los agentes) no representaba un peligro relevante para la investigación, al no tratarse de un dato que previsiblemente haya de provocar la fuga del inculcado. De hecho la denuncia anónima no es prueba de cargo, ni lo denunciado es novedoso. La llamada anónima no proporciona otros datos que la mera identificación y revela una fuente errónea (un familiar no identificado del culpable fallecido que en realidad seguía vivo). De, otra parte, no se conocen los términos exactos de la conversación mantenida entre el acusado y la hermana del homicida, pues en las posteriores declaraciones judiciales de ésta, en instrucción y en la vista del juicio oral, no ha dado aclaración alguna, cuando hubiera sido necesario hacer algunas precisiones. De modo que se desconoce si el Sargento conocía o no la identidad del comunicante anónimo, dato que sus compañeros de la Policía Judicial llegaron a descubrir. También es factible que el cuñado de Lorenza saliera a colación por simple deducción, dadas las tensas relaciones familiares. Precisamente, la investigación encomendada al Comandante de Puesto se dirigía a comprobar el entorno familiar del sospechoso, lo que podía estar dirigido tanto a identificar al autor de la llamada anónima, como su fuente (la persona supuestamente fallecida que le había hecho la confidencia). Incluso, cabe suponer que si el acusado ya conocía el contacto mantenido por la Guardia Civil con el confidente (f. 10 del atestado ampliatorio), lo cual no está en absoluto demostrado, carecía de sentido que aquél preguntara por familiares fallecidos. Lo cierto es que la retractación o falta de memoria de los testigos nos ha privado de conocer más detalles relevantes. De otro lado, tampoco queda acreditado el motivo del acusado, en el sentido de que pudo estar movido por la intención de obtener más eficazmente la información o tratarse de una simple indiscreción, incluso imprudente, sin intención de atentar contra el éxito de la investigación que se estaba llevando a cabo.

**QUINTO** De conformidad con el art. 240 LECrim (LEG 1882\16), las costas se declaran de oficio.

VISTOS los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación.

## FALLAMOS

Que debemos ABSOLVER y ABSOLVEMOS a Claudio de los delitos por los que era acusado, declarando de oficio las costas procesales.

Notifíquese a las partes con expresión del derecho de las mismas a interponer recurso de casación en el plazo de cinco días siguientes al de la última notificación practicada de esta Sentencia. Notifíquese en forma personal al condenado.

Así, por ésta, nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

### Disposiciones Estudiadas:

Ley Orgánica 10/1995, de 23 noviembre. CÓDIGO PENAL (RCL 1995\3170)

- Art. 417
- Art. 466

### Relaciones Activas:

- Cita. Sobre el bien jurídico protegido del delito de deslealtad profesional del art. 417 CP/1995. STS Madrid 13 julio 1999. (RJ 1999\5698)
- Cita. Sobre el bien jurídico protegido del delito de deslealtad profesional del art. 417 CP/1995. STS Madrid 14 mayo 1998. (RJ 1998\4877)

### Voces:

## OBSTRUCCION A LA JUSTICIA Y DESLEALTAD PROFESIONAL

Figuras delictivas

Juez o miembro del Tribunal, representante del Ministerio Fiscal, Secretario Judicial o cualquier funcionario que revelare actuaciones declaradas secretas

No debe estimarse

Sargento comandante de puesto de la Guardia Civil: no puede ser sujeto activo del

delito:

[F. 3]

## OBSTRUCCION A LA JUSTICIA Y DESLEALTAD PROFESIONAL

Figuras delictivas

Particular que intervenga en el proceso que revelare actuaciones declaradas secretas

No debe estimarse

Sargento comandante de puesto de la Guardia Civil: participación limitada a llevar a cabo ciertas indagaciones encargadas por compañeros de la Policía Judicial: ni intervino en el procedimiento ni tenía conocimiento de las actuaciones:

[F. 3]

## INFIDELIDAD EN LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS Y VIOLACION DE SECRETOS

Figuras delictivas

Autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados

Doctrina general

Bien jurídico protegido:

[F. 3]

## INFIDELIDAD EN LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS Y VIOLACION DE SECRETOS

Figuras delictivas

Autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados

No debe estimarse

Llamada telefónica de sargento comandante de puesto de la Guardia Civil en la que revela la noticia de que un comunicante anónimo imputa un homicidio al hermano de la receptora de la llamada, a quien había llamado para preguntarle sobre el entorno familiar de la persona a la que se le imputaba el homicidio: sospechoso que ya era conocido, no siendo novedoso lo denunciado, ni generándose ningún peligro para la investigación, que terminó con la condena del homicida: desconocimiento del contenido y finalidad exacta de las revelaciones debido a las retractaciones y falta de memoria de los testigos: principio de intervención mínima:

[F. 4]

## Notas de Redacción:

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). La manipulación de dicho texto por parte de Editorial Aranzadi se puede limitar a la introducción de citas y referencias legales y jurisprudenciales. Editorial Aranzadi no se hace responsable de los errores que en materia de Protección de Datos de Carácter Personal pudiera adolecer esta versión oficial.